

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

| CONSULTA SENTENCIA |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| DEMANDANTE         | GABRIEL ARCANGEL GUTIÉRREZ MESA                  |
| DEMANDADO          | COLPENSIONES                                     |
| RADICADO           | 05001-31-05-008-2018-00210-01                    |
| MAGISTRADA PONENTE | MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO                     |
| TEMA               | Pensión de invalidez, condición más beneficiosa. |
| DECISIÓN           | Confirma                                         |

*Medellín, veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinte (2020)*

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de Junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Esta providencia se profiere, conforme al procedimiento de sentencia escrita, habiendose surtido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a adoptar decisión de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **GABRIEL ARCANGEL GUTIÉRREZ MESA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 030**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

## **I. – ASUNTO**

Conoce este colegiado en grado jurisdiccional de Consulta, en favor de Colpensiones, la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, el día 28 de enero de 2019, que condenó a la entidad demandada, a pagar la pensión de invalidez en favor del actor, conforme al principio de la Condición Más Beneficiosa.

## **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que el señor GEBRIEL ARCANGEL GUTIERREZ MESA fue calificado el 8 de julio de 2014, por la junta médica de COLPENSIONES quien le dictamino una pérdida de capacidad laboral del 38,99% derivada de una enfermedad de origen común, con fecha de estructuración del 30 de enero de 2014. Que, interpuso los recursos legales en contra de dicho dictamen, por lo que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, emitió dictamen Nro. 53298 del 26 de marzo de 2015, estableciendo una pérdida de capacidad laboral del 59,57% de origen común, estructurada el 30 de enero de 2014; dictamen que quedó en firme, al no ser interpuesto en contra del mismo más recursos.

Que al creer reunidos los requisitos para una pensión de invalidez de origen común, el actor petitionó el 27 de abril de 2015, tal prestación ante COLPENSIONES, pero dicha administradora la negó mediante resolución N° GNR-277.483 del 10 de septiembre de 2015, bajo el argumento que el demandante no acreditaba las semanas exigidas, en los años inmediatamente anteriores a la estructuración del estado de invalidez, sin que fuere posible estudiar su caso bajo la aplicación de la condición más beneficiosa.

Ante la negativa obtenida de COLPENSIONES, interpuso el día 13 de octubre de 2015, los recursos de vía gubernativa en contra del referido acto administrativo, insistiendo en que acreditaba los requisitos mínimos para acceder a la pensión de invalidez, recursos que fueron resueltos por la entidad, a través de las Resoluciones GNR 410.206 del 17 de diciembre de 2015 y VPB 11.916 del 10 de marzo de 2016.

Agregó, que el demandante, si bien no cuenta con 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración, sí es beneficiario del principio de la condición más beneficiosa, según la postura de la Corte Constitucional.

### **III. PRETENSIONES**

La acción judicial está dirigida a que se ordene al ente demandado a reconocer y pagar una pensión de invalidez de origen común a favor del señor GABRIEL ARCANGEL GUTIÉRREZ MESA, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, o en subsidio la indexación de las condenas, y las costas del proceso.

### **IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA**

Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, la entidad demandada la contestó a través de vocera judicial, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, precisando, frente a los hechos allí narrados, que acepta como ciertos aquellos que aluden al dictamen de pérdida de capacidad laboral, así como a la solicitud pensional, la respuesta negativa que se emitió, sin que le consten los restantes supuestos fácticos, los cuales deberán ser objeto del debate probatorio, y propuso las defensas exceptivas que denominó: *“inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de invalidez con fundamento en el principio de la condición más beneficiosa, en vigencia de la Ley 860 de 2003; inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación de las condenas e intereses moratorios de manera simultánea; prescripción; e imposibilidad de condena en costas”*.

## **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

En sentencia del 28 de enero de 2019, dictada en audiencia pública, la juez a-quo condenó a COLPENSIONES a pagar la pensión de invalidez al señor GABRIEL ARCANGEL GUTIÉRREZ MESA, en virtud de la aplicación del principio de la Condición más Beneficiosa, a partir del 30 de enero de 2014 (fecha de estructuración de la invalidez), ordenando pagarle un retroactivo pensional por valor de \$45.324.528, causado entre dicha fecha y el 31 de enero de 2019, y a continuar pagándole sobre 13 mesadas pensionales al año, una mesada pensional por valor del salario mínimo legal mensual vigente, a partir del 1º de febrero de 2020.

Absolvió por los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al ampararse en una interpretación jurisprudencial para el reconocimiento pensional, y concedió la indexación de las sumas objeto de condena.

Como fundamento de su decisión expuso la a quo que, conforme a la obligatoriedad del precedente de la Corte Constitucional, resultaban de obligatoria acogida, las sentencias de tutela proferidas por la entidad entre los años 2011 al 2014, que terminaron con la expedición de la Sentencia SU-442 de 2016, conforme a las cuales, en virtud de los principios de solidaridad, equidad y proporcionalidad, es permitido el salto normativo de la Ley 860 de 2003 al Decreto 758 de 1990, cuando el asegurado alcanzó a configurar una expectativa legítima en vigencia del Decreto 758 de 1990, como ocurre en el presente caso.

Precisó, que el actor alcanzó a cotizar al 31 de marzo de 1994, un total de 426,44 semanas de cotización, por lo que cumplió con la exigencia normativa de contar con 300 semanas cotizadas en vigencia del Decreto 758 de 1990.

Le impuso condena en costas a COLPENSIONES.

Teniendo en cuenta que la decisión de primera instancia, no fue apelada por ninguna de las partes, y que la misma comprende una condena en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, se pronunciará este colegiado, en grado jurisdiccional de consulta, en favor de la entidad pública demandada.

### **Alegatos de conclusión**

Encontrándose dentro del término de traslado otorgado, el apoderado judicial de COLPENSIONES, Dr. ALEJANDRO ACEVEDO GARCIA portador de la T.P. N° 168.254 del C.S.J., presentó sus alegatos de conclusión ante esta instancia, solicitando la revocatoria de la sentencia de primer grado, pues en su sentir, el actor, no acreditó los requisitos de ley para dejar causado el derecho y por ende no le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez como lo adujo la jueza de primera instancia, quien mal interpreto el fallo de la Corte Constitucional sentencia T-953 M.P MARIA VICTORA CALLE CORREA, que alude al principio de la condición más beneficiosa, desconociendo que la referida providencia solo tiene efectos inter partes y no erga omnes, y por ende se debían acoger los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia.

Al referido apoderado judicial, se le reconoce personería para actuar en los términos del memorial de sustitución poder allegado al plenario.

### **VI. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

**Naturaleza jurídica de la pretensión. – Pensión de invalidez de origen común, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa:** Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

El objeto central de esta Litis, consiste en determinar si el señor GABRIEL ARCANGEL GUTIERREZ MESA, logró acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez de origen común, bajo la aplicación del principio constitucional de la Condición más Beneficiosa, y solo en caso de prosperar esta pretensión, la Sala pasará a analizar si el retroactivo pensional reconocido y la indexación de las sumas objeto de condena, se ajustan a derecho.

### **Pensión de invalidez**

El artículo 38 de la ley 100 de 1993 señala que se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

El estado de invalidez es una condición física o mental que impide a la persona desarrollar una actividad laboral remunerada, debido a la considerable disminución de sus capacidades físicas y/o psíquicas e intelectuales, de manera tal que no le es dable suplir por sí mismo una vida digna, en resumen, es la pérdida de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social que le permiten desempeñarse en una actividad u oficio habitual, según lo establecido en el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional.

### **CASO CONCRETO**

Conforme la prueba documental aportada con la demanda, visible a folios 13 y siguientes del plenario, especialmente el dictamen de PCL realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, de fecha 26 de marzo de 2015 (fl. 25), y la aceptación que del mismo hace COLPENSIONES en las resoluciones GNR 277483 del 10 de septiembre de 2015 y VPB 11916 del 10 de marzo de 2016, es claro para la Sala que el señor GABRIEL ARCANGEL GUTIÉRREZ MESA, es una persona invalida, pues presenta un 59,57% de PCL, invalidez estructurada el día 30 de enero de 2014, derivada de una enfermedad de origen común.

Y dado que la historia laboral del actor (fls. 32 y ss.) no se evidencian más que 4 semanas cotizadas en los 3 años inmediatamente anteriores al 30 de enero de 2014, es indudable que no reúne la densidad de cotizaciones establecida en el art. 39 de la Ley 100 de 1993, tanto en su versión original, como en la modificación introducida por la Ley 860 de 2003, siendo esta última la normativa pensional vigente para la fecha de estructuración de su estado de invalidez.

### **PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA**

Toda vez que la parte demandante, solicita la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, con remisión al acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, esta Sala procederá a realizar el análisis fáctico y jurídico correspondiente, para determinar si el señor GABRIEL ARCANGEL GUTIÉRREZ MESA logra acreditar los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez que reclama, lo anterior en aplicación de este principio, el cual permite que algunas normas derogadas tengan efectos ultractivos.

En efecto, y es que, al no existir un régimen de transición en materia de invalidez, se han establecido algunas reglas para proteger las expectativas legítimas de aquellas personas que han cotizado en los distintos regímenes pensionales y que no cumplen con los requisitos exigidos en la normativa vigente al momento de la fecha de estructuración de la invalidez<sup>1</sup>.

Este principio de la condición más beneficiosa, se constituye en sí mismo, como una excepción a la regla general, según la cual la norma aplicable es la que regía para la fecha de estructuración de la invalidez del afiliado.

---

<sup>1</sup> La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, ha recordado en la sentencia SL 1884 de 2020: “Ante la ausencia de régimen de transición, en pensiones de invalidez y de sobrevivientes, los jueces pueden aplicar el principio de la condición más beneficiosa, lo cual implica dar efectos ultractivos a la normatividad anterior, cuando en su vigencia se cumplan los supuestos de la norma relativos al número mínimo de cotizaciones, porque en esos eventos se protegen las expectativas legítimas del asegurado...”.

Si bien, en esta misma sentencia, la Sala de Casación Laboral, se apartó de las consideraciones de la Corte Constitucional, vertidas en la sentencia SU-005 de 2018, ello lo hizo, por referirse a una forma irrestricta de aplicar la condición más beneficiosa, en la pensión de sobrevivientes.

Resaltando la Sala, que el referido principio de la CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA ha sido abordado por las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional, quienes han delimitado sus alcances con diferentes aristas.

Al respecto, debe recordarse que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, expuso su criterio en la sentencia N° SL-2358 de 2017, precisando que la aplicación de este principio constitucional solo es pertinente, con respecto a la normatividad inmediatamente anterior, esto es, de ley 860 de 2003 a ley 100 de 1993, o de ley 100 de 1993 al acuerdo 049 de 1990, y que tratándose de controversias, donde el afiliado estructuró su estado de invalidez en vigencia de la Ley 860 de 2003 pero le resulta más beneficiosa la densidad de cotizaciones establecida en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, la aplicación de este principio solo era factible, siempre y cuando, la estructuración de la invalidez hubiese ocurrido entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, es decir, se estableció un criterio de temporalidad, que el caso de marras no se cumpliría.

Para la Corte Constitucional, por el contrario, de acuerdo a lo adocinado en la sentencia **SU-442 de 2016**, el principio de la condición más beneficiosa no se restringe exclusivamente a admitir u ordenar la aplicación de la norma inmediatamente anterior a la vigente, sino que se extiende a todo esquema normativo anterior bajo cuyo amparo el afiliado o beneficiario haya contraído una expectativa legítima, concebida conforme a la jurisprudencia. En palabras de la Corte: *“la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que no solo la norma pensional vigente (Ley 860 de 2003) o la inmediatamente anterior (Ley 100 de 1993), sino incluso la antecedente a esta última (Decreto 758 de 1990), puede aplicarse a una solicitud de pensión de invalidez, en la medida en que la persona haya cumplido con la densidad de semanas de cotización previstas en este último antes de expirar su periodo de vigencia”*.

La Corte Constitucional, además, no fija límites temporales para la aplicación del principio de la condición más beneficiosa como sí lo hace la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, como se anotó.



Criterio jurisprudencial que acoge y comparte esta Sala de decisión laboral, y dado que el afiliado GABRIEL ARCANGEL GUTIERREZ MESA, tiene reunidas, al 31 de marzo de 1994, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema pensional de la Ley 100 de 1993, un total de 490 semanas cotizadas, por lo que, en todo caso, con anterioridad al 1° de abril de 1994, logró causar el derecho a una pensión de invalidez, al reunir la densidad exigida en el literal b) del art. 6° del **Decreto 758 de 1990**, normativa según la cual, para causar una pensión de invalidez de origen común el afiliado deberá: *“...Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.*, siendo esta la normativa pensional aplicable al demandante, pues se advierte que el actor, cotizó bajo su vigencia, y por ello la expectativa pensional que en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, era aquella contenida en el Decreto 758 de 1990, que aprobó el acuerdo 049 de 1990. Motivos por los cuales se confirmará la sentencia de primer grado.

Ahora, si bien la sentencia de primera instancia, fue proferida el 28 de enero de 2019, es preciso revisar lo adoctrinado por la H. Corte Constitucional, en la Sentencia SU-556 de noviembre de 2019, a través de la cual estableció como criterio para aplicar la condición más beneficiosa en pensión de invalidez, un test de procedencia. Ello por cuanto, esta exigencia se erige en criterio jurídico inexorable, a efectos de validar el salto normativo en pensión de sobrevivientes, de Ley 860 de 2001 a Decreto 758 de 1990.

Las condiciones del test de procedencia, son las siguientes:

- Que el asegurado, además de su situación de invalidez, pertenezca a un grupo de especial protección constitucional, o situación de riesgo derivada de alguna de estas condiciones: i) analfabetismo, ii) vejez, iii) pobreza extrema, iv) cabeza de familia, v) desplazamiento, o vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa.

- Que razonablemente pueda inferirse que la ausencia de reconocimiento pensional por invalidez, afecta directamente la satisfacción de necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y la vida en condiciones dignas.
- Valorar como razonables los argumentos del actor, para entender justificada su imposibilidad de haber cotizado las semanas necesarias legalmente, en anterioridad a la fecha de estructuración de su invalidez, y
- Verificarse una actuación diligente de parte del actor, en orden a solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez.

En el presente caso, esta Sala advierte que razonablemente se puede inferir que el señor GABRIEL ARCANGEL GUTIÉRREZ MESA, cumple a satisfacción el referido test. En primer lugar, ha arribado a la vejez, al tener más de 60 años, y si bien no es analfabeta, sí es una persona con escasa formación académica, ya que, en las referencias sociales de calificación, obrantes a folios 20 y siguientes del expediente, se lee que es una persona que no alcanzó a terminar su bachillerato; además de lo anterior, se refiere que se encuentra en condiciones de discapacidad para trabajar, desde el 18 de junio de 2013, que actualmente no trabaja, y su actividad habitual antes de la incapacitado, era desempeñarse como montallantas. Se advierte, asimismo, en sus condiciones de movilidad, consignadas en el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que es una persona que se moviliza en muletas, tiene severo compromiso para la marcha, y solo experimenta una suerte de deambulación, al arrastrar sus pies (fl. 20), lo cual evidencia el compromiso funcional en el que se encuentra para asumir trabajos por su propia cuenta.

Ante estas condiciones, es claro, que también se cumple con la segunda condición del mencionado test, en tanto, razonablemente puede inferirse, que la ausencia de reconocimiento pensional, afecta directamente la satisfacción de sus necesidades básicas, y; se encuentra justificada su intermitencia en las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones como independiente, desde los años 2011 y siguientes, a causa de su imposibilidad de trabajar. De

otro lado, sus ingresos siempre fueron por valor del salario mínimo, y es evidente, que ha sido diligente en la reclamación de su derecho, acudiendo reiterativamente a reclamarlo, y cumpliendo con las respectivas instancias de calificación de su invalidez, a efectos de acceder al derecho reclamado.

En consecuencia, tal y como se anticipó, se confirmará el derecho pensional reconocido en primera instancia.

**Prescripción, disfrute, monto pensional, retroactivo pensional y número anual de mesadas pensionales.**

Al respecto, debe recordarse que el disfrute de la pensión de invalidez se encuentra regulado expresamente en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, normativa según la cual: *“La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado.”*, que en el caso del demandante se concretó el día 30 de enero de 2014, conforme al dictamen de pérdida de capacidad laboral realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia (fls. 25/28).

El razonamiento de la A quo sobre la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada, se ajusta a derecho, al concluir que ninguna mesada pensional en favor del actor, se encuentra afectada por el fenómeno extintivo. En efecto, la fecha de estructuración de la invalidez es el 30 de enero de 2014, y el actor reclamó administrativamente a Colpensiones el reconocimiento de la pensión, el día 27 de abril de 2015 (fl. 13); se le notificó la resolución GNR 277.483 del 10 de septiembre de 2015, el día 28 de septiembre de 2015, y la demanda se presentó el 11 de abril de 2018, por lo que no alcanzaron a transcurrir los 3 años de que trata el artículo 151 del CPT y SS, y el 488 del CST.

Respecto al monto de la mesada pensional, por valor del salario mínimo legal mensual vigente en favor del actor, sobre 13 mesadas pensionales anuales, se ajusta a derecho, y no llevará a esta Sala a hacer mayores

pronunciamientos al respecto, ya que se está conociendo en grado de Consulta en favor de Colpensiones.

Con relación al retroactivo pensional adeudado al demandante, y que la A quo liquidó en valor de \$45.324.528, comprendido entre el 30 de enero de 2014 y el 31 de enero de 2019, el mismo es acertado, ya que partió de tomar 13 mesadas anuales, e incluir los salarios mínimos para cada anualidad.

Asimismo, se advierte que la juez de primera instancia autorizó a Colpensiones, efectuar los descuentos en salud, del retroactivo adeudado, lo cual se encuentra acorde a las normas legales y a la jurisprudencia nacional.

Finamente, al no haberse concedido los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, esta sala encuentra ajustado a derecho, el mecanismo de mantenimiento del poder adquisitivo constante de las mesadas pensionales, concedido por la juez de primer grado, al ordenar la indexación de las sumas objeto de condena, por lo que se confirmará integralmente la sentencia de primera instancia.

En esta instancia, no se han causado costas procesales, al haberse conocido en Grado Jurisdiccional de Consulta.

## **VII. - DECISIÓN.**

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE:**


**PRIMERO. CONFIRMAR** íntegramente la sentencia que se conoce en Consulta, de fecha y procedencia conocida, según lo expuesto en precedencia.

**SEGUNDO: ABSTENERSE** de imponer condena en costas procesales de segunda instancia, de conformidad a lo expuesto.


**TERCERO:** En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

Se ordena la notificación por ESTADOS de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.


Los magistrados



**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada



**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada

Certifico:  
Que el auto anterior fue notificado por  
ESTADOS Nro. 139 fijado hoy en la  
Secretaría de este Tribunal, a las 8 a.m.

Medellín, 24 de septiembre de 2020

---

Secretario